

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 39 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 16° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-5533-2022
CARATULADO	: LATORRE/FISCO DE CHILE

Santiago, veintidós de Septiembre de dos mil veintitrés.

**Vistos.**

Que, con fecha 10 de junio de 2022, comparece don Juan Pablo Gallardo Parada, abogado, en representación de doña **Rebeca Verónica Latorre Espinoza**, jubilada, domiciliada en Pasaje Ciprés N°6.161, comuna de San Pedro de la Paz, quien deduce demanda civil de indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual en contra del Estado, representada por el **Consejo de Defensa del Estado**, a través de su abogado procurador fiscal, doña **Ruth Israel López**, o quien lo subroge o reemplace en el cargo, todos con domicilio en Agustinas N°1.225, Piso 2, comuna de Santiago.

Que, con fecha 10 de febrero de 2023, el demandado contestó la demanda.

Que, con fecha 27 de febrero de 2023, el demandante evacuó la réplica.

Que, con fecha 14 de marzo de 2023, el demandado evacuó la réplica.

Que, con fecha 30 de marzo de 2023, se recibió la causa a prueba.

Que, con fecha 07 de agosto de 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

**Considerando.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

**Primero.** Que, comparece don Juan Pablo Gallardo Parada, en representación de doña Rebeca Verónica Latorre Espinoza, quien deduce demanda civil de indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual en contra del Estado, representada por el Consejo de Defensa del Estado, a través de su abogado procurador fiscal, doña Ruth Israel López, o quien lo subrogue o reemplace en el cargo, todos ya individualizados.

Fundan su demanda en el hecho que el 04 de enero de 1974, cuando su representada tenía 12 años de edad, su madre Rebeca María Espinoza Sepúlveda, que iba a cumplir 40 y su medio hermano Cristian 8 años, pasaban por la plaza de la Constitución cuando unos agentes de la DINA tomaron detenida a su madre, a la demandante, a una sobrina de 7 meses de edad y a Marcelo un niño de 8 meses que su madre había adoptado sin papeles, llevándola al regimiento de la FACH en El Bosque, liberándolos unos días después, dejándolos en su casa que estaba vacía y solos.

Indica que esa fue la última vez que vio a su madre, siendo todos los menores distribuidos, a su hermano Cristian lo dejaron en un hogar de menores ya que nadie se podía hacer cargo de él, y la actora comenzó a deambular por la familia paterna hasta que la pusieron en internados, señalando que la familia de su madre jamás les tendió una mano y la de su padre la tuvo dos o tres días y después no la quiso tener más por el temor a que algo les pudiera pasar, agregando que a su hermano lo volvió a ver cuando cumplió 18 años y se pudo hacer cargo de él.

Agrega que nunca tuvo noticias de su madre y que se llegó a enterar de ella más o menos el año 2002 cuando ingresó al PRAIS, enterándose que su madre estuvo en Tejas Verdes, fue torturada y vejada tirándola encadenada dentro de un saco al mar.

Manifiesta que los hechos fueron reconocidos por el Estado, constando en el informe Rettig de 1990 que doña Rebeca María Espinoza Sepúlveda, habiendo sido recién expulsada del Indap, fue trasladada a la Guarnición Área del Bosque para ser interrogada y luego ser puesta a disposición de la DINA, que la llevó a Tejas Verdes donde la torturaron y luego fue desaparecida. Por otra parte la demandante figura como víctima



«RIT»

Foja: 1

bajo el número 4.536 del informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Señala que ambos hechos descritos afectaron profundamente la vida de su representada sumiéndole en una depresión que perdura hasta el día de hoy; detenciones que fueron cometidos por agentes del Estado vulnerando los artículos 13, 15 y 18 de la Constitución Política de 1925, además de una numerosa legislación internacional que consta en Tratados Internacionales, Declaraciones y Actas que protegen los derechos humanos, normativa que no admite disposición o acuerdo en contrario por normas del derecho positivo interno de los Estados, las que fueron violadas.

Arguye que la demanda su basa en el artículo 5 inciso segundo de la actual Constitución Política de la República, el que reconoce la primacía de los derechos que emanan de la naturaleza humana por sobre la soberanía del Estado, y en cuyo artículo 38 inciso segundo establece que cualquier persona lesionada en sus derechos por la acción del Estado o sus organismos puede reclamar ante los tribunales que determine la Ley, de modo que su representada se encuentra legitimada para reclamar la responsabilidad civil del Estado por los hechos narradas, puntualizando que ella se basa en la falta de servicio y las normas de responsabilidad de derecho común en cuanto no sean incompatibles.

Finalmente, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual del estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por daño moral y, en concreto, se le condene a pagar a favor de doña Rebeca Verónica Latorre Espinoza, la suma total de \$300.000.000.-: \$150.000.000.- por el daño infligido directamente a la víctima y \$150.000.000.- por el daño infligido a la víctima a causa de la detención ilegal, tortura y desaparición de su madre, acogiendo el daño moral, por ambos conceptos, o indistintamente cualquiera de ellos.

**Segundo.** Que, comparece la abogada Carolina Vásquez Rojas, en representación del Fisco de Chile, al contestar la demanda principal, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone a continuación.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

Comienza oponiendo la excepción de cosa juzgada respecto de aquella parte de la demanda que se refiere al daño por la desaparición forzada de doña Rebeca Espinoza Sepúlveda puesto que la demandante doña Rebeca Latorre Espinoza ya dedujo, junto a otros actores, una demanda civil en contra del Fisco de Chile ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, en causa rol C-2569-2009, sobre indemnización de perjuicios por daño moral con motivo de la desaparición forzada de su madre, doña Rebeca Espinoza Sepúlveda, concurriendo la identidad legal de persona, ya que se trata del mismo actor; identidad legal de la cosa pedida, esto es la indemnización por daño moral; y la causa a pedir, la desaparición forzada de la madre de la demandante.

En segundo lugar y subsidiariamente opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

**Reparaciones mediante transferencia directa de dinero y pensiones.**

En tal sentido manifiesta que las indemnizaciones que el demandante solicita se desenvuelven en el marco de las infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En efecto, la Ley Nro. 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante reparaciones mediante transferencias directas de dinero, mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas, lo que permite que numerosas víctimas obtengan una reparación monetaria. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, haciéndose referencia en la discusión de dicha ley incluso al objeto indemnizatorio de reparación moral y patrimonial de aquella.

Hace presente que a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-, por concepto de reparaciones de daño moral ocasionado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

Agrega que estas pensiones han sido una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, además de la indicada pensión, la Ley 19.123 consagra además transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios.

### **Reparaciones específicas.**

Expresa que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes números 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Indica en primer término que la ley 19.992 (y sus modificaciones) estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, todos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Agrega que así, se estableció para quienes figuraran en dicha nómina una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consigna adicionalmente, se concedió a los beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Precisa que el PRAIS cuenta con un equipo compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Menciona que también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, junto con beneficios en vivienda, correspondiente al acceso a subsidios para vivienda.

### **Reparaciones simbólicas.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

Expone que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino que precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. En este sentido refiere una serie de reparaciones de carácter simbólico en las que ha incurrido el Estado (Memorial del Cementerio General, establecimiento del Día del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros).

**La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.**

De lo expresado anteriormente concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera del Estado que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Así las cosas, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones. Cita jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia en apoyo de su posición.

**En segundo lugar opone excepción de prescripción extintiva.**

En subsidio opone la prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducidas en este proceso civil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

en el artículo 2497 del mismo Código. Solicita que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.

Esgrime que conforme al relato efectuado por los demandantes, as detenciones, privaciones de libertad y torturas se produjeron en un lapso de tiempo que va entre noviembre de 1974 y octubre de 1975.

Razona expresando que incluso entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15 de junio de 2018, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en la norma recién citada.

Señala que en subsidio de la excepción de prescripción recientemente referida, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción indemnizatoria, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Refiere finalmente sobre la alegación de los demandantes en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria de autos, indica que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, no es factible, a su juicio, apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Cita variada jurisprudencia al respecto.

### **Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria**

Que en la especie se han ejercido acciones de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que las acciones impetradas pertenecen -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Agrega que en base a normas contenidas en el Derecho Internacional, que no hay norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar

**En cuanto al daño e indemnización reclamada.**

Interpone en subsidio de las defensas y excepciones reproducidas anteriormente, las siguientes alegaciones respecto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Enfatiza en que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberán ser justificadas íntegramente.

**En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.**

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los beneficios extrapatrimoniales que los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ



«RIT»

Foja: 1

distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad era precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

### **Improcedencia del pago de reajustes e intereses.**

Finaliza su contestación señalando que no procede el cobro de reajustes e intereses, en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja la demanda y establezca esa obligación, solicitando que de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

En razón de lo expuesto previamente, pide tener por contestada la demanda y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

**Tercero.** Que, al evacuar la réplica, la parte demandante, expresó lo siguiente.

**En cuanto a la excepción de cosa juzgada,** señala que la sentencia invocada por la demandada no concedió indemnización alguna a favor de la actora, lo que infringe los tratados internacionales ratificados por Chile.

**En cuanto a la excepción de reparación integral,** indica que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación no es óbice ni inconveniente alguno para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, como señaló la Corte Interamericana de Justicia.

**En cuanto a la excepción de prescripción** expone que la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos.

**Cuarto.** Que, al evacuar el trámite de duplica la parte demandada reitera los fundamentos de hecho y de derecho de su contestación, especialmente en cuanto a la excepción de prescripción y la excepción de pago.

Añade que la demandante no negó la existencia de una causa previa ya fallada, limitándose a desvirtuar la excepción, señalando que la cosa juzgado no sería aplicable en caso de no haberse acogido la demanda, razonamiento que escapa a toda lógica jurídica.

**Quinto.** Que, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que allí se señalaron.

**Sexto.** Que, en respaldo de sus peticiones, la demandante rindió prueba documental, consistente en:

1. Certificado de nacimiento.
2. Copia simple de nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
3. Copia simple de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Conciliación Volumen I, Tomo 2.
4. Copias simple de carpeta de la comisión Valech.
5. Copia de jurisprudencia.
6. Copia de informe psicológico de daño de fecha 27 de abril de 2023, emitido por Margarita Mena Yáñez.

**Séptimo.** Que, la parte demandante ofreció prueba testimonial consistente en la declaración de los testigos Tany Cerlmira Mueller Villalobos, María Rina Arzona Palma, en audiencia celebrada el 15 de junio de 2023.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

**Octavo.** Que, la parte demandada acompañó la siguiente prueba documental:

- 1- Oficio Ordinario DSGT N° 4792-1487, 10 de julio de 2023, emitido por el Instituto de Previsión Social Unidad Valech, Rettig y otras Leyes Reparatorias como prueba documental.
- 2- Copia simple de demanda, sentencia de primera instancia, sentencia dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago y sentencia de la Excma. Corte Suprema relativos a la causa Rol C-2569-2009, iniciados ante el 29° Juzgado Civil de Santiago.

**Noveno.** Que, atendido el mérito de los antecedentes que constan en autos, esto es, lo expresado por ambas partes en la etapa de discusión y la prueba rendida, se tienen por acreditados lo siguientes hechos:

Que el 04 de enero de 1974, cuando doña Rebeca Verónica Latorre Espinoza tenía 12 años de edad, fue detenida junto con su hermano y su madre en la plaza de la Constitución, siendo dirigida al regimiento de las Fuerzas Aéreas de Chile, donde permaneció más de un día, siendo liberada junto a su hermano, mas no así su madre a la cual no volvió a ver nunca más.

Que producto de las detenciones sufridas ese día, tuvo que rehacer su vida viviendo en distintas casas de familiares por el lado de su padre, de la cual estaba alejada, y la que por temor a las represalias por hacerse cargo de ella, optó por internarla hasta cumplir la mayoría de edad.

Queda asentado, además, que la actora se encuentra calificada como víctima N°4.536 en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N°18032, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech.

1. **En cuanto a la excepción de cosa juzgada interpuesta por el Fisco.**

**Décimo.** Que, respecto a la cosa juzgada la Excelentísima Corte Suprema, ha señalado que “es una institución de orden público que constituye uno de los fundamentos necesarios del régimen jurídico al



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

asegurar la certidumbre y estabilidad de los derechos que ella consagra” (Corte Suprema, 9 de mayo 1958. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 55 sección 1º, página 77).

**Undécimo.** Que, la excepción de cosa juzgada implica “el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, en virtud del cual no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior” (Casarino Viterbo, Mario, “Manual de Derecho Procesal”, Tomo III, Sexta edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, página 128).

**Duodécimo.** Que, según lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la excepción de cosa juzgada puede alegarse por todos aquellos que según la ley aprovecha la sentencia, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya 1º identidad legal de personas, 2º identidad de la cosa pedida, y 3º identidad de la causa de pedir, entendiéndose esta última el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

**Décimo tercero.** Que, respecto de la **identidad legal** de persona, se configura cuando las partes figuran en el nuevo juicio en la misma calidad legal que en el anterior. En cuanto a **la identidad de la cosa pedida**, concurre cuando el beneficio jurídico que se reclama en el juicio y al cual se pretende tener derecho, es el mismo que se demandó en el juicio anterior. Por último la **identidad de la causa de pedir**, dice relación con el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

**Décimo cuarto.** Que, del mérito de la documental aportada por el Fisco, se puede verificar que doña Rebeca Verónica Latorre Espinoza, dedujo en contra del Fisco de Chile demanda de indemnización de perjuicios, en su calidad de hija de la detenida desaparecida Rebeca María Espinoza Sepúlveda, por los perjuicios sufridos por esta última, ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-2569-2009, la que fue rechazada en primera instancia mediante sentencia de fecha 26 de noviembre de 2009, revocada y acogida en segunda instancia mediante sentencia de fecha 10 de junio de 2012, en causa 2803-2010 por la Ilma. Corte de Apelaciones de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

Santiago, y finalmente fue anulada por la Corte Suprema, al acoger el recurso de casación en el fondo en causa 6920-11, por sentencia del 12 de septiembre de 2012.

**Décimo quinto.** Que, conforme al mérito de lo señalado, considerando la acción deducida en los autos causa Rol C-2569-2009 del 29º Juzgado Civil de Santiago, se acogerá la acción de cosa juzgada por la indemnización del daño moral sufrido con motivo de la detención ilegal y posterior desaparición forzada de la madre de la demandante.

## **II. En cuanto a la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco.**

**Décimo sexto.** Que, las disposiciones legales invocadas por el Fisco, entre ellas las Leyes N° 19.123, 19.992 y 20.874 como fundamento de su alegación en cuanto a que los perjuicios reclamados ya han sido reparados, denominadas también “Leyes de Reparación”, si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de su deber de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares directos, en ningún sentido las reparaciones materiales y simbólicas en ellas contenidas, a juicio de esta sentenciadora, resultan incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios, de considerarse que concurren los requisitos para ello.

A mayor abundamiento que de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 19.123, se establece una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de la violencia política, que no contempla la limitación pretendida por la demandada, debiendo tenerse presente, a mayor abundamiento, que la propia ley, también conocida como Ley de Reparación, ha ido ampliando no sólo los beneficios otorgados sino también la calidad de beneficiarios a lo largo del tiempo.

En el mismo sentido, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

«RIT»

Foja: 1

dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible – a juicio de esta magistratura – con una reparación meramente simbólica.

Además, la indicada normativa y cuerpos legales en general citados tampoco establecen renuncia, prohibición o incompatibilidad alguna con una eventual reparación monetaria que tenga por objeto la reparación integral del daño padecido, razones todas ellas que en consecuencia llevan a esta magistratura a rechazar la alegada excepción de reparación.

### **III. En cuanto a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco.**

**Décimo séptimo.** Que, de forma previa a entrar al fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de esta magistratura, cabe pronunciarse sobre la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco.

**Décimo octavo.** Que, en este sentido cabe reiterar que la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad.

**Décimo noveno.** Que, al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ

Foja: 1

Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso significaría una negación de Derechos Fundamentales, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que: *“en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados,...si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna”* (Rol CS 3573-2012).

Todas estas reflexiones conducen en consecuencia al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

#### IV. En cuanto a la pretensión indemnizatoria.

**Vigésimo.** Que, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en las detenciones, y privación de libertad practicados a doña Rebeca Verónica Latorre Espinoza, al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

Así, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.



De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949.

**Vigésimo primero.** Que, establecida de forma manifiesta la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor; así el daño moral tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

**Vigésimo segundo.** Que, la existencia del daño moral alegado en el caso de marras pudo presumirse atendida la gravedad del hecho ilícito, sus consecuencias y las circunstancias que lo rodearon.

**Vigésimo tercero.** Que, en la determinación del quantum de la indemnización, cabe señalar que en la especie se configura el daño moral padecido por la demandante por los motivos expresados en el considerando anterior, razón por la que pese a lo complejo de calcular y cuantificar este tipo de daño se lo regula prudencialmente en la cantidad de \$ 30.000.000 (treinta millones de pesos)

**Vigésimo cuarto.** Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada.

**Vigésimo quinto.** Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistratura que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 , 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427 y 428 del





«RIT»

Foja: 1

Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I. Se **acoge** la excepción de cosa juzgada deducida por el Fisco el 10 de febrero de 2023 respecto de la indemnización por la desaparición forzada de la madre de la demandante.

II. Se **rechazan** las excepciones de reparación y de prescripción deducidas por el demandado.

II.- Se **acoge**, parcialmente, la demanda deducida a lo principal del escrito de fecha 10 de junio de 2022 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral causado a la demandante por su calidad de víctima directa en la suma total de \$30.000.000 a favor de doña Rebeca Veronica Latorre Espinoza.

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

**Rol N° C-5533-2022.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Septiembre de dos mil veintitrés.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXBXXHVTWPZ